

Al momento de escribir esta columna se contabilizan en el país casi 140 personas fallecidas por coronavirus y unos 4.000 nuevos contagiados.

El dato aparece en los medios como el informe del tiempo o el precio del cobre. Uno se pregunta en qué momento nos endurecimos y deshumanizamos de tal forma, en que es posible normalizar datos tan dramáticos.

La pretensión de imponer como fecha para el retorno de clases presenciales el 1 de marzo surge a partir de esta lógica. Francamente, no se entiende cuál es la idea con la pandemia sin muestras de dar tregua y en medio de la implementación de un esperanzador proceso de vacunación masiva.

Esta última se espera que eleve los umbrales de inmunidad y -con ello- baje la circulación del coronavirus. Sólo así se justificaría la gran campaña comunicacional realizada por el gobierno en este tema.

Pero incluso asumiendo esta premisa, es difícil entender la razón de no esperar como mínimo que se hayan vacunado todos los grupos proyectados y que -al menos- se espere el período en que las dos dosis de la vacuna empiecen a generar su pick de inmunidad, esperando que las cifras de contagio y de muerte caigan, antes de forzar clases presenciales.

Por qué volver a las aulas si las cifras de muertos y contagios no bajan. Las prioridades de este gobierno claramente buscan responder a los grupos económicos del país.



() Juan Guillermo
Morales*



Se trata de algo demasiado evidente y parte de lo que debemos empezar a cambiar al construir un Chile más justo: esta “democracia” de representantes elegidos por voto popular, pero que no se deben a la ciudadanía incauta que los elige, si no a los grupos económicos que los financian.

Para reafirmar esta idea no puede ser más contundente la señal que da el propio ministro de Economía, Lucas Palacios, quien lleva adelante el «trabajo sucio» de enfrentar a quiénes sustentamos lo valórico por sobre lo neoliberal.

El secretario de Estado muestra un nulo poder argumentativo. Lo hace recurriendo a la caricatura, a la falacia y con tal falta de respeto que resulta simplemente inaceptable y que merece todo nuestro repudio.

Palacios señaló que los profesores no queremos trabajar y que, por eso, “somos dignos de un estudio». Otro personaje coludido en la jugada dice por su parte que los profesores «estuvieron todo el año de vacaciones».

Ante la vil e infundada agresión, no tenemos que tratar de justificarnos en nada. Las profesoras y los profesores sí estuvimos todo el 2020 trabajando duro, con gran compromiso y en medio de la adversidad.

Impartiendo clases a distancia y capacitándonos para seguir desarrollando nuestras tareas bajo condiciones muy distintas a las normales y de mejor forma si fuera necesario.

No hay que explicarle nada al senador Iván Moreira, ni al ministro Palacios. Me niego a caer en ese juego. Dudo que alcancen o quieran comprender que para un docente lo prioritario es impartir educación en un contexto que resguarde la salud, la integridad y la vida de las personas.

Nuestros apoderados son quienes saben mejor que nadie la realidad y la saben porque desde sus hogares compartieron nuestros desvelos junto a sus hijas e hijos. Eso es lo que nos debe importar, ése es el punto de referencia.

El esfuerzo pedagógico lo asumimos como comunidad junto a nuestros estudiantes y sus familias y estamos orgullosos y agradecidos por eso.

En conclusión: los profesores sí queremos volver a las aulas. Extrañamos la camaradería de la escuela. El contacto directo con nuestros estudiantes y apoderados que, sin duda, es el más fructífero.



Pero, ojo. Como profesionales del área «humanista» tenemos un imperativo ético que debe ser defendido: evitar que la educación chilena, en aras de la normalización de su economía, sea convertida en una nueva «zona de sacrificio» de niñas y niños y de sus familias, sólo para cumplir un capricho de los poderosos que lo único que arriesgan es una porción más o menos suculenta en su tajada de utilidades.

Si despejamos la mala leche inyectada al debate por parte de este gobierno y nos incorporamos a un diálogo abierto, con altura de miras y respetuoso con el conjunto de los actores que componen nuestras comunidades educativas, entraremos en vereda al camino de solución que ya se vislumbra en el horizonte y que sólo se pone en riesgo si lo queremos recorrer a los tropezones.

Esa es, por lo demás, la postura del Colegio de Profesores de Chile.

(*) El autor es profesor de Historia y dirigente gremial del Servicio Local Barrancas.